

NUEVOS ACTORES Y VIEJAS PROBLEMÁTICAS EN AMÉRICA LATINA. SOBRE EL RE-ARRAIGO DE LA ECONOMÍA EN ARGENTINA, BOLIVIA Y VENEZUELA

Philippe Dautrey

Centro de Investigación y de Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, (Cuernavaca, México)

Resumen: Al llegar al poder, los nuevos actores políticos en Argentina, Bolivia y Venezuela establecieron una alianza productiva con el sector agro-minero, el cual se benefició del auge exportador de principios del siglo XXI. Al mismo tiempo, apoyaron sus políticas fiscales y benefactoras en esta alianza e incrementaron, en el caso de Bolivia y Venezuela, el intervencionismo estatal mediante mayor titularidad pública. En otros términos; se orientaron hacia el re-arraigo de la economía en el sentido polyaniano de la palabra. En rigor, fue el regreso de lo político lo que determinó ese rumbo. Sin embargo, no faltaron las limitantes al re-arraigo. Así el peso de la deuda externa y la mala redistribución de las ganancias procedentes del crecimiento motorizado por las exportaciones, además de un férreo rechazo por parte de las elites, plantean todavía la cuestión de la magnitud del cambio.

Palabras claves: América Latina - sector agro-minero - políticas económicas - re-arraigo de la economía - lo político

Abstract: Once they acceded to power, Argentina, Bolivia and Venezuela's new political actors, surfing on the booming trade of the early 2000s, forged a productive alliance with the exporting primary sector. In fact, they relied on this trade expansion to develop fiscal and welfare policies and, in the case of Bolivia and Venezuela, reinforce state interventionism through increasing public participation. In short, they opted for economic re-embeddedness, within Polanyi's meaning of the term. This change of direction was made possible by the return to political action. Still, there have been impediments to the re-embedding process: the burden of the external debt, the very poor redistribution of the gains from the export growth, and the elite's determined rejection of the process are frustrating the magnitude of the changes.

Key words: Latin America - primary sector - economic policies - economic re-embeddedness - political action

La década de los ochenta supuso la transición a la democracia en América Latina. Pero las crisis de la deuda y los ajustes estructurales a que dieron lugar, llevaron al descontento popular en las siguientes décadas (durante los años 90 en Vene-

zuela y a principios del siglo en Argentina y Bolivia). Aunada al deterioro de las instituciones políticas, dicho desazón propició el protagonismo de nuevos actores que ofrecieron programas de corte reformista (desde el inconsistente "capitalismo hu-

mano" argentino hasta la más drástica "revolución bolivariana" venezolana). Amén del cambio político, esas tres naciones se beneficiaron también de un auge en la exportación de bienes primarios. Pretendieron asentar políticas benefactoras, variables en su alcance, basadas en una alianza productiva con las elites agromineras. Para esos países, cuya heterogeneidad estructural y dependencia del exterior son típicas del modelo latinoamericano del subdesarrollo¹, tal propuesta ha sido fundamental a la hora de enfrentar viejas problemáticas como la búsqueda de un compromiso entre el desarrollo económico y las apremiantes necesidades sociales.

Frente a esa contradicción dominante (sector moderno y atrasado, elite económica y mayorías empobrecidas, etc.), el reformismo latinoamericano ha representado la insistencia en la realización de uno de sus términos (modernización y apoyo a la elite) para que actúe como disolvente no violento del otro (sector premoderno y empobrecimiento)². Ha supuesto la modernización a través de la intervención del capital extranjero, haciendo del mismo, un factor disolvente de las antiguas estructuras pero sin reforma básica ni sublevación (en cambio, la revolución implica la superación de la contradicción). Si bien los cambios en Argentina encajan con tal concepto, lo ocurrido en Bolivia y Venezuela se sitúa entre tal reformismo y el cambio radical (la superación de la contradicción dominante) que a veces procura convertirse en realidad, sobre todo en este último país.

Lo anterior convoca entonces a interrogarse sobre el significado de lo sucedido, deslindándose sin embargo de la doxa mediática, que recurre generalmente a "explicaciones" desde la dimensión cognitiva de las estrategias de elite (esto es, se vale de una apreciación influida por las ideologías formales, los intereses instrumentales y la experiencia política de éstas con las clases bajas)³. Visto desde una perspectiva polyaniana, los cambios en los tres países llevan

implícito el re-arraigo de la economía en la sociedad, en contraposición a la ideología neoliberal que ve en los mercados autorregulados (o sea, el desarraigo de la economía) la superación de la contradicción dominante. En efecto, para Karl Polanyi, el término "arraigo" expresa la idea que la economía, que circunscribe al mercado, no es autónoma sino que está subordinada a las relaciones sociales y también a la política. El orden económico es sólo una función del orden social en el que se contiene. Cuando se produce el desarraigo, el mercado autorregulado requiere nada menos que la separación institucional de la sociedad en una esfera económica y una esfera política⁴. De ahí el peso de lo político, como modo de relación entre los distintos ordenes, para la cuestión del re-arraigo (la diferencia de naturaleza del reformismo en los tres países considerados radica a la postre en el disímil grado de reacomodo de los ordenes). El regreso de lo político aparece entonces como la condición del desarrollo equilibrado⁵, donde la economía vuelve a una posición de mayor arraigo.

Refiriéndose a ese marco explicativo es como el presente trabajo se propone ubicar las distintas caras del cambio en las tres naciones. A tal efecto, se observará primero el papel de lo político respecto del re-arraigo de la economía. A continuación, se examinará bajo qué condiciones éste pudo producirse y cómo se concretizó. Se concluirá abordando los límites del re-arraigo.

EL PAPEL DE LO POLÍTICO

El "capitalismo humano" argentino (con la justicia social para la clase trabajadora) remite indudablemente a la distinción que hacía Perón entre dicho capitalismo y el "despótico" (el cual consiste en una serie de concesiones a los propietarios extranjeros de los sectores económicos estratégicos). Por su parte el "capitalismo andino" que se promueve en Bolivia, tampoco pone en tela de juicio la propiedad

privada (que incluye el uno por ciento de la elite dedicada al negocio del agro y que es dueña del 80 por ciento de las tierras fértiles⁶). No obsta el derecho de acceso de las grandes empresas mineras, gasíferas y petrolíferas, a las reservas subterráneas. En rigor, la alianza productiva es un pacto con las multinacionales extranjeras que explotan los recursos naturales y el campesinado indígena⁷. En cambio en Venezuela, la estrategia oscila entre una alianza productiva de esta índole (el incremento de los lazos entre capital local y extranjero junto con el ejercicio de un control fiscal más estricto) y la marcha hacia el "socialismo del siglo XXI", plasmado en la revolución bolivariana. Esto es, una economía mixta con una marcada rectoría del Estado incluyendo la extensión de su titularidad y la expropiación de los fondos y fábricas subproductivos.

Al mismo tiempo, se han reforzado las políticas fiscales y el control estatal sobre la economía mientras se han desarrollado políticas benefactoras. Dicho intervencionismo, reducido en Argentina, llega a ser prioritario en Venezuela. En realidad, su magnitud da cuenta del grado de re-incrustación de la economía en la sociedad (para Polanyi y los sustantivistas, aquella se centra en la satisfacción de las necesidades materiales según los distintos requerimientos institucionales y no sobre la única maximización de los beneficios individuales⁸). A su vez, la amplitud del re-arraigo se relaciona con la centralidad que los gobiernos vuelven a otorgar a lo político. Al respecto, Polanyi⁹ observa que "la sociedad económica había surgido como algo distinto del Estado político" y que "la reintegración de la sociedad al mundo humano" se ha convertido en el objetivo persistentemente buscado del pensamiento social. Es lo político, en tanto modo de relación entre los distintos órdenes de la práctica (lo económico, lo social, etc.) lo que permite la re-incrustación¹⁰. Condiciona el grado de re-arraigo del mercado y la integración de las clases pobres y marginadas

a sus beneficios. Entonces, se enfrenta con la política como sistema de poder vigente y ejercicio de la violencia legítima, como en el caso de Bolivia y Venezuela.

Una breve incursión en la sociología general y en la teoría de la acción, permitirá esclarecer el papel de lo político. Cabe recordar en un principio, que los teóricos coinciden en afirmar que la modernidad va a la par con la ineluctable autonomía de los órdenes de la práctica (lo económico, lo social, lo político, etc.) sin que ellos sean disjuntos. Así pues, lo político es un orden de la práctica (en cambio, la política produce un pensamiento sobre una configuración dada de estos órdenes). Sobre todo, uno de estos órdenes constituye el contexto principal de lo económico; puede ser lo político y la regulación externa que implica, pero las corrientes de pensamiento discrepan en cuanto a cuál orden termina por convertirse en contexto central: lo meta-económico, la cultura -pensamos en Max Weber- o la "socialidad" primaria y secundaria; la relación de función a función¹¹. A fin de cuentas el grado de autonomía en uno de los órdenes de la práctica, cuya forma extrema es el desarraigo, no remite a su inherente funcionalidad sino a una decisión política (o sea, la manera como una sociedad se auto-instituye)¹².

Aún así, desde los años 80, el contexto principal de lo económico es lo meta-económico, siendo su vertiente teórica el individualismo metodológico, su vertiente ideológica el neo-liberalismo y su institución los mercados globales autorregulados. Como consecuencia, el orden económico se desarraiga de los órdenes político y social (en Argentina, por ejemplo, la aplicación de las políticas económicas de corte neoliberal desde los años 70 fue a la par con el deterioro de la relación entre el ingreso promedio de ambos extremos de la sociedad, la cual pasó de 9 a 24 veces entre 1980 y 2000¹³). Como lo advirtió Polanyi¹⁴, los intentos de dar mayor autonomía al mercado aumentan la tensión. En tal esquema, la reafirmación

de lo político (desde la referencia al “capitalismo humano” hasta el discurso sobre la revolución bolivariana) mengua la primacía de lo meta-económico como contexto principal. Incluso tiende a convertirse en contexto principal, por lo menos en Venezuela. Al conferirle una nueva centralidad, los gobiernos intentaron contrarrestar el desarraigo de la economía respecto de la sociedad, concretizado en la pobreza y la desigualdad, mediante un compromiso específico.

EL NUEVO COMPROMISO: LA ALIANZA PRODUCTIVA

Los gobiernos establecieron una alianza productiva tácita con el sector privado exportador, el cual había cobrado importancia a raíz de la ola de privatizaciones de las décadas de los ochenta y noventa en Bolivia y en Argentina sobre todo. De hecho, la especialización en la producción agrícola y en la de materias primas para los países del centro, ha existido desde principios del siglo XVI en la América hispana. Como lo observa Rouquié¹⁵, se organizó una extraversion económica que condicionó las modalidades de introducción del capitalismo y de la que aún no ha salido el continente. Las elites, cuya formación es inseparable de la prosperidad económica de ese desarrollo extravertido, lo han consagrado todo al producto bien cotizado en el mercado mundial; el estaño en Bolivia y el petróleo en Venezuela. En cambio, Argentina nunca tuvo una especialización tan estrecha. Por añadidura la crisis de la deuda, al obligar a los deudores a exportar más, condicionó a las economías locales a orientarse a la exportación de las materias primas que gozaban de ventajas comparativas (incluso en la no tan especializada Argentina, más de la mitad del aumento de las exportaciones totales en el período de 1989 a 1997 se explicó por la oferta agregada de seis bienes primarios)¹⁶. Empero, las ganancias en divisas dependen de los volubles precios de los productos agro-mi-

neros, por lo que la vinculación a los mercados globales, contribuye a tornar esas naciones vulnerables, frente a los vaivenes de la economía.

Más recientemente, las políticas de apertura ligadas a la globalización convocaron a la re-primarización de las economías, como es el caso de Bolivia y en los demás países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) como Venezuela¹⁷. En ambos países, durante el período 2003-2006, se evidenció una fuerte correlación entre la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la proporción de los productos primarios como porcentajes de las exportaciones totales. Cuanto mayor es el peso del sector agro-minero en las exportaciones, mayor es la tasa de crecimiento¹⁸. En Bolivia, la extracción de recursos naturales y la producción de productos primarios, realizó un aporte más importante al PIB que antes de la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo implementado por Morales (a mediados del año 2006, prácticamente un 75 por ciento de las exportaciones estaban compuestas por productos agro-mineros)¹⁹. En Argentina, proveedor de materias primas y alimentos para los países del Norte desde el fin del siglo XIX, la integración en los mercados globalizados sigue teniendo como eje central la exportación de productos de esta índole (en realidad, la reprimarización de su economía se produjo desde el decenio de los setentas debido a la concentración de las inversiones externas en los sectores con mayores ventajas comparativas). Ahora bien, son las condiciones externas favorables, las que motorizaron el crecimiento económico sostenido que se experimentó en las tres naciones desde el año 2003. La creciente demanda por parte de los países de reciente industrialización, China y la India principalmente, y el significativo crecimiento en las exportaciones primarias (incluido el petróleo, cuyas reservas son las mayores del mundo fuera del Medio Oriente) explican principalmente esa buena racha²⁰.

Tal coyuntura en los mercados mundiales inclinó a los regímenes reformistas a adoptar una estrategia de crecimiento del sector agro-minero, donde se concentra el capital y las ganancias. Vislumbraron una alianza productiva con la fracción exportadora de ese sector, donde pudieran controlar los ingresos generados por su inserción en el mercado mundial y así extender el bienestar social a los pobres, a través de políticas benefactoras. Entonces, fomentaron su expansión. Transfirieron subsidios y otorgaron concesiones impositivas, contribuyendo a aumentar la rentabilidad del sector (mientras tanto la producción alimenticia destinada al mercado interno se estancó, lo cual explica en parte la inflación). En Argentina, los gobiernos Kirchner fortalecieron la posición del sector, o sea, el capital privado nacional y extranjero, brindándole subsidios a la exportación (en el 2007, los 500 millones de dólares de subsidios al sector agrícola, favorecieron al reducido grupo de grandes productores y empresas multinacionales que monopolizan el 80 por ciento de la producción, la distribución de fertilizantes, etc. y las exportaciones. Más aún, veinte empresas privadas percibieron un 81 por ciento de los subsidios)²¹. En la Bolivia de Morales, donde la prioridad a la planificación se reflejó en un aumento significativo en el nivel de gastos de capital público (20,1 por ciento contra un promedio regional del 5,9 por ciento), las firmas extranjeras obtuvieron gas a precios subsidiados. Asimismo, consiguieron préstamos subsidiados del Estado para financiar sus gastos corrientes (a una tasa del 3 por ciento mientras que el Estado toma préstamos del Banco Andino a una tasa del 8 por ciento). Por su parte, el sector privado agroindustrial se benefició con las políticas oficiales tales como el subsidio a los componentes de la producción y a las importaciones (por ejemplo, el combustible diesel) y la reducción de pago de impuestos del 25 al 13 por ciento²². No obstante, la propensión de la oligarquía agro-exportadora a convertir la rentabilidad en capital fijo, o sea, en inver-

sión productiva, es baja en comparación con la de Asia. En general, las ganancias obtenidas a partir del auge exportador no tienden a invertirse productivamente para motorizar el desarrollo económico; en lugar de ello, se “exportan”²³.

HACIA EL RE-ARRAIGO DE LA ECONOMÍA

Las políticas benefactoras

La política económica de Argentina, Bolivia y Venezuela, en donde la carencia de prestaciones básicas hacía meramente formal la ciudadanía social, se había movido rumbo al mercado autorregulado, hasta que llegaron los nuevos actores políticos. Al desplazarse la economía en dirección del desarraigo (al respecto, destaca la era Menem en Argentina), los trabajadores se volvieron más vulnerables ante el desempleo y se les otorgó menos derechos asistenciales, tal como lo había advertido Polanyi en otras circunstancias²⁴. En tal contexto, suele surgir un contra-movimiento protector que participa del desarraigo. Se organiza la resistencia al movimiento de *laissez-faire*, hacia la expansión del alcance del mercado²⁵ (los hitos fueron los saqueos a los comercios y los cacerolazos del 2001 en Argentina, la movilización indígena en Bolivia y el “caracazo” del año 1989 en Venezuela).

Al ser elegidos gobiernos reformistas, como consecuencia del contra-movimiento, se institucionalizó la ampliación de las políticas benefactoras mediante una mayor contribución financiera del Estado. En Venezuela (el sólo caso en América Latina) el gasto público social per cápita es mayor de lo que fue en el año 2000 (en términos reales, aumentó en más de un 300 por ciento entre 1998 y 2007)²⁶. En Bolivia, el gasto público social se encuentra todavía por encima del promedio regional; representa el 18,5 por ciento de los ingresos fiscales contra un promedio del 13 por ciento²⁷. En cambio, en el resto de América Latina el aumento del gasto público en educación,

salud y bienestar social (cerca de un 10 por ciento entre los años 2002-2003 y durante 2004-2005), no fue mucho más que el aumento proporcional en los ingresos totales obtenidos del crecimiento basado en las exportaciones. Además, el incremento se ha estabilizado desde entonces a una tasa per cápita que se encuentra por debajo de la obtenida en la segunda mitad de la década de los noventa²⁸.

Dichas políticas benefactoras oscilan entre el asistencialismo reparador (repartición de los satisfactores básicos) como en Argentina y Bolivia y la construcción de un sistema de bienestar orientado a la ciudadanía social (acceso a la salud, la educación, etc. para mitigar las desigualdades) en Venezuela. En ese país caribeño, se extendió la atención sanitaria accesible para los pobres (programas *Barrio Adentro*) y la cantidad de médicos de atención primaria del sector público se amplió de 1628 en 1998 a 19751 a principios del año 2007. En el mismo año, cerca del 40 por ciento de la población se benefició de alimentos subsidiados (a través de los programas alimentarios *Casas de alimentación*, *Red Mercal*, *Pdval*). También aumentó el acceso a la formación de adultos (*Misiones Robinson*) y a la educación, sobre todo a nivel superior (se multiplicó la matrícula en más de 2, 5 entre 1998 y 2007)²⁹. En Bolivia, se distribuyeron *bonos de dignidad* a los ciudadanos de más de sesenta años, con valor de entre 18 y 30 dólares por mes así como bonos *Juancito de Pinto*, de 28 a 30 dólares por año, otorgados a todos los niños que concurren a la escuela pública de primero a sexto grado. Además, los subsidios orientados a la entrega de unidades habitacionales y viviendas sociales y los programas en las áreas de salud y educación (como el de alfabetización *Yo sí puedo*, a través de una ayuda sustancial de Venezuela y Cuba) se incrementaron y alcanzaron el 18,5 por ciento de los desembolsos presupuestarios, en comparación con el promedio regional de 12,7 por ciento³⁰. Por lo contrario en Argentina, en

donde la medida más trascendente del gobierno Kirchner, fue el establecimiento de un subsidio de 50 dólares mensual para los desempleados y las familias indigentes, los programas sociales se redujeron a una mínima asistencia.

La acotación de la esfera económica

Polanyi observa también que el intervencionismo, al subordinar el mercado a la dirección demócrata, participa también del contramovimiento protector. Además, los mecanismos regulatorios protegen a los seres humanos de las presiones de las fuerzas de mercado³¹. En las tres naciones, es sobre todo mediante las políticas fiscales como se concretizó el incremento de la intervención del Estado. En efecto, a raíz del auge exportador, los gobiernos participaron en las ganancias mediante impuestos suplementarios y retenciones sobre las exportaciones de los recursos agro-mineros. En Argentina, donde se duplicaron los precios de los granos entre 2003 y 2007 y se acumularon excedentes comerciales, el régimen de Néstor Kirchner practicó retenciones sobre las exportaciones agrícolas. En la vecina Bolivia, se estableció una política de mayores regalías en el sector de hidrocarburos (aumento de un 19 a un 50 por ciento sobre el volumen de la producción) y los impuestos a la exportación se cuadruplicaron hasta niveles iguales a los de la mayoría de los países capitalistas de Occidente (pero muy inferiores a las tasas vigentes en Medio Oriente y Asia). En Venezuela, al aplicar nuevos impuestos sobre la mana petrolera (aumento de la tasa de regalía en la Faja del Oricono, la reserva petrolera más grande del mundo, del 1 por ciento al 16,6 por ciento en 2004 y el establecimiento de los impuestos de extracción, de registro de exportación y de superficie en 2006), el gobierno duplicó sus ingresos³². A diferencia de Venezuela, en Argentina y en el país andino, una parte relativamente reducida de ingresos fiscales, incluido los ingresos adicionales percibidos durante el auge ex-

portador, se emplearon para financiar el desarrollo social³³.

Esas medidas fueron acompañadas por un aumento de la titularidad pública en los sectores estratégicos (recordamos Polanyi y las mercancías ficticias, que no se producen para venderse en un mercado). En Argentina, el primer gobierno Kirchner se rehusó a volver a nacionalizar sectores estratégicos de la economía que fueron privatizados en los regímenes anteriores. En cambio, en Venezuela y Bolivia donde el Estado pretende ser el promotor del desarrollo y controlar el excedente económico, las políticas fiscales se complementaron con un mayor control de éste sobre la economía. Con todo en el país andino, donde la Asamblea Constituyente propuso el control nacional de los recursos en base al segundo pilar del Plan Nacional de Desarrollo (la soberanía), sólo se realizaron nacionalizaciones marginales. El gobierno de Morales, firmó contratos con casi todas las multinacionales extranjeras de actividad extractiva presentes en el país, pero el Estado sigue siendo un socio minoritario (con poca influencia sobre decisiones que atañen a la inversión y la producción). En Venezuela el gobierno presentó un Programa Económico de Transición a finales de los noventa, que buscaba el equilibrio entre el mercado y nuevas formas de propiedad privada como el cooperativismo. Fue el preludio de la nacionalización de empresas estratégicas (en los rubros de petróleo, gas, acero, cemento, producción y distribución de alimentos, telecomunicaciones y electricidad) y de la firma de contratos de explotación conjunta del petróleo y del gas con más de una docena de multinacionales que le brindan un control estatal mayoritario. No hay negocio petrolero donde Petróleo de Venezuela no tenga la mayoría accionaria y el control operacional, lo cual se inscribe en una estrategia de recuperación de la plena soberanía petrolera. Ahora bien, la participación del Estado en los recursos financieros derivados de la venta del sector agro-mi-

nero bajó en 3,2 puntos porcentuales en 2006-2007, en comparación con la década anterior. En cambio, subió el 7 por ciento en Bolivia³⁴.

En esos dos países se realizaron también cambios estructurales en el campo. Así la Constitución boliviana limitó la titularidad de la tierra a unas 10.000 hectáreas por persona (lo cual se puede infringir al poner títulos a nombre de familiares lejanos), procurando dar un destino productivo a las tierras. Con la misma intención, el gobierno venezolano expropió varios millones de hectáreas de tierras fértiles no cultivadas que se encontraban en manos de especuladores y 32 plantaciones que registraban subproducción. De hecho, en ambas naciones la falta de inversión y la especulación han debilitado la oferta de productos y explican en parte la espiral inflacionista, y así mismo restringen el alcance del re-arraigo.

LOS LÍMITES AL RE-ARRAIGO

La contrapartida de la alianza productiva

Según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), en toda América Latina los ingresos del sector público, derivados de las exportaciones del sector agro-minero se estimaban en un 4,5 por ciento del PIB en el año 2002 y se estabilizaron en un 9 por ciento en 2007³⁵. A pesar de lo anterior, los recursos fiscales adicionales derivados del auge exportador, no han significado ningún aumento sustancial del gasto público social, el cual, como porcentaje del Producto Interno Bruto alcanzó su nivel más alto a fines de la década de los noventa, en el marco de un escaso crecimiento. Por añadidura dicho gasto, diseñado para contrarrestar la distribución primaria, o sea, la generada por el mercado, no es progresivo (en particular en lo que respecta a la seguridad social) y no tiene un efecto redistributivo significativo en

el sentido de reducir substancialmente la concentración del ingreso³⁶.

En rigor, la prioridad en la asignación de los recursos fiscales al pago de la deuda externa perjudicó el desarrollo del gasto (las políticas de ajuste y la necesidad de ampliar la capacidad instalada para exportar y obtener divisas desplazaron a los objetivos sociales). Aprovechando las condiciones favorables de los mercados mundiales para los productos agro-mineros, los gobiernos respectivos buscaron cancelar la deuda con el propósito de limitar la influencia de acreedores tales como el FMI y el Banco Mundial (BM)³⁷. En Argentina, Néstor Kirchner dio prioridad al pago anticipado de la deuda al FMI, vinculando los pagos de ésta al nivel de crecimiento de la economía³⁸. El gobierno boliviano abonó también parte de su deuda externa, al cuadruplicarse las reservas en moneda internacional con el aumento de las regalías petroleras y de los impuestos a la exportación, desde la llegada al poder de Morales³⁹. Por su parte, Venezuela acumuló para 2008 más de 35.000 millones de dólares en reservas en moneda extranjera y canceló sus deudas, pese al aumento del gasto público social, librándose de los condicionamientos impuestos por los bancos internacionales (FMI, BM y Banco Interamericano de Desarrollo). Más aún, 30 mil millones de dólares se orientaron hacia el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) entre 2005 y 2007, permitiendo el financiamiento de 172 proyectos en infraestructura, educación, salud, etc.⁴⁰. Sin embargo, la baja en la deuda externa de esos países coincidió con el aumento de la deuda interna; o sea, la toma de préstamos realizada por las subsidiarias de los bancos extranjeros y los grupos financieros locales. Al efectuar préstamos a los gobiernos mediante el recurso a las instituciones financieras estadounidenses y europeas, estas filiales reprodujeron la dependencia financiera⁴¹. La misma se reiteró también, a través del sector privado que desde los años noventa, tiene mayor libertad de

contratar deuda directamente en los mercados internacionales para enfrentar la competencia⁴².

Los que se apropiaron de la mayor parte de los ingresos generados por el auge de las exportaciones fueron; el sector privado y las multinacionales. En Argentina, los beneficios del crecimiento económico se acumularon a favor de un reducido número de empresas agrícolas locales y extranjeras, las cuales transfieren un porcentaje sustancial de sus ganancias al exterior del país, disminuyendo el efecto multiplicador sobre el resto de la economía⁴³. Asimismo en Bolivia, las ganancias declaradas por las medianas y grandes empresas del sector privado, se duplicaron desde el comienzo de 2005 hasta 2007 (durante este mismo año, los bancos nacionales y extranjeros que operan en el país lograron aumentar la rentabilidad neta más que en las últimas dos décadas). En Venezuela, fue también la elite empresarial la que se benefició del auge de las materias primas del período 2004-2008⁴⁴.

Y sin embargo, no hubo adelantos contundentes en el empleo. En Argentina, el desempleo seguía siendo, en el 2005, más alto de lo que era al inicio de la crisis en 1998. De hecho, los sectores de la agricultura mecanizada y del petróleo experimentaron un crecimiento de las exportaciones, pero son muy intensivos en capital y emplean a una cantidad reducida de trabajadores. En Bolivia la baja en la tasa de desocupación (de un 8,2 por ciento en 2006 a un 7,8 en 2007) debe interpretarse en el contexto de un proceso masivo de emigración. En cambio, el desempleo descendió a menos de la mitad en Venezuela (de un 17 por ciento en 1998 a un 7 por ciento en 2007) donde el sector formal absorbía el 55,6 por ciento de los trabajadores para esta última fecha, contra un 47,6 por ciento en el año 1999 (en Argentina, los empleados informales representaban un 40 por ciento de la población activa para 2007 y en Bolivia eran más de la mitad de ella). Pero los trabajadores del sec-

tor informal venezolano, al igual que los de las naciones rioplatense y andina, carecen de poder de negociación para lograr aumentos de sueldos vinculados a la creciente inflación, como se da el caso en las principales industrias (petróleo, acero, aluminio) que subcontratan a la mayor parte de su plantilla⁴⁵. Además, la asignación de recursos fiscales a sueldos y salarios ha permanecido por debajo de las asignaciones de la última década en esas naciones, según el FMI (tales recursos se orientaron al equilibrio de la balanza de pagos y al pago de la deuda externa)⁴⁶.

Con todo, la pobreza exhibe una mejora en relación a la situación que prevalecía a finales de la década de los noventa. La tasa conjunta de pobreza e indigencia bajó entre el año 2000 y el año 2006 tanto en Argentina (pasó del 66,3 por ciento al 28,2 por ciento) como en Venezuela (bajó del 70,8 al 40,1 por ciento) donde se implementaron amplios programas sociales. Aún así, no se registró ningún avance desde 1990 en esas naciones. Lo mismo que en Bolivia donde la tasa de pobreza rural alcanza el 70 por ciento (son dos millones de indígenas sin tierra). En cambio aumentó la desigualdad (salvo en Venezuela)⁴⁷. La inflación explica parte de esa situación. En la Argentina, se duplicó el índice real del precio de los alimentos (era superior al 20 por ciento en el 2007). Esto llevó al deterioro de los ingresos, a pesar del aumento del salario mínimo, y a la reducción del valor del subsidio para las familias indigentes a menos de un tercio. En Bolivia el salario mínimo, el más bajo de toda América Latina, fue elevado en un 10 por ciento para el año 2008. Sin embargo, la inflación casi canceló el aumento real; fue de un dólar por mes⁴⁸. La inflación venezolana, al subir del 14 por ciento en el 2005 al 22 por ciento en el 2007, afectó sobre todo a los alimentos importados, pero su impacto sobre las clases populares se compensó con el aumento del salario mínimo (se multiplicó por 3.2 veces entre 2002 y 2007 y es uno de los mayores del continente)⁴⁹. En realidad,

las presiones inflacionistas son el producto de las fallas productivas y de la declinación de la inversión privada en la producción y la distribución, pese a la rentabilidad. Proceden también del mayor crecimiento en las exportaciones agrícolas, en detrimento de la producción local⁵⁰.

El rechazo de las elites

Mediante la fiscalización de las ganancias del sector agro-minero, la mayor titularidad pública y la nacionalización, los gobiernos de Bolivia y Venezuela pretenden pasar de una regulación interna (por medio de los mercados autorregulados) a una regulación externa (desde el Estado) y así establecer políticas benefactoras con el fin de modificar la distribución primaria de los ingresos. En otras palabras, intentan re-arraigar la economía. Pero en América Latina suelen existir umbrales variables de intolerancia de los grupos dominantes, en los cuales la intrusión de lo político no es aceptada. La concentración del poder económico es tal, que tiende a volver *ipso facto* ilegítima cualquier medida que afecta los intereses de estos⁵¹.

Empero, es bajo una forma renovada, como las elites económicas han rechazado las transformaciones estructurales en el control de la tenencia de la tierra y de los recursos energéticos que van a la par con la alianza productiva. En Bolivia, el conflicto de intereses de grupos sociales se ha escudado detrás la exigencia de una agenda regionalista. Así el Plan Nacional de Desarrollo (2006) destinado a fortalecer la capacidad del gobierno para conformar la política económica y redistribuir los beneficios de las exportaciones y su propuesta de redistribuir 30 millones de hectáreas a 200.000 familias campesinas y el saneamiento de 56 millones de hectáreas, provocó la reivindicación de estatutos de autonomía regional, encabezada por las élites y empresarios locales (dueños de más del 90 por ciento de los medios de comunicación y prensa local), en los depar-

tamentos de Santa Cruz y de la Medialuna (la Bolivia mestiza y rica). La convocatoria a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución, acorde con la petición del pueblo indígena de tener una mayor inclusión política y social también causó el rechazo de dichos departamentos y la organización de referendos autonómicos. Además, las empresas dedicadas a la extracción (42 multinacionales dominan la actividad gasífera y petrolífera del país) pospusieron indefinidamente todo proyecto de gran escala⁵². En cuanto al régimen bolivariano de Chávez, tuvo que contrarrestar un golpe militar en abril de 2002 y un *lockout* patronal entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, que llevó a una declinación del 24 por ciento en el PIB⁵³. En resumen las elites rechazan las reformas y la intrusión de lo político en el orden económico, volviéndolas más difícil de llevar a cabo. Incluso en la más conservadora Argentina, los monopolios del sector de la energía (electricidad, gas) crearon escasez para aumentar su tasa de ganancia, mediante el incremento de los precios. Dichos sectores y el de las telecomunicaciones, mostraron igualmente una débil inclinación a efectuar sustanciales inversiones de largo plazo que sostuvieran el crecimiento, pese a previos acuerdos, en el contexto de la firma de los contratos de privatización⁵⁴.

CONCLUSIÓN

En Argentina, Bolivia y Venezuela arribaron al poder gobiernos reformistas a raíz de movilizaciones en contra del desarraigo de la economía. Beneficiándose del incremento de las exportaciones agro-mineras de principios del siglo XXI, intentaron re-arraigarla. A tal efecto, buscaron un compromiso para hacer compatible la incorporación al mercado mundial (el auge exportador) y las políticas benefactoras (a través de los ingresos fiscales que las originan). En otros términos, su reformismo ha intentado recomponer la relación entre el

orden económico y el orden social con el propósito de mitigar la contradicción dominante, como en Argentina y Bolivia, e incluso resolverla, como en Venezuela. Lo que está en juego es si se puede remediar los desequilibrios sociales, sólo por medio de la alianza productiva. En el corto plazo queda por ver también, si seguirá el auge exportador generado por la India y China, sobre el cual se basan las políticas benefactores ya que en esos países las polaridades limitan el consumo masivo.

No obstante, la crítica de los oponentes a esos gobiernos se enfoca en su retórica (el "capitalismo andino" y la "revolución bolivariana", con referencias al socialismo) y no en su práctica concreta (la alianza productiva). ¿Será para prevenirse contra futuras transformaciones sistémicas que van más allá de dicha alianza? En todo caso, los intentos de re-arraigo de la economía (desde el mínimo programa argentino hasta las reformas sistémicas venezolanas) ya causaron un "choque de los principios organizadores del liberalismo económico y la protección social que conduce a una profunda tensión institucional", para utilizar las palabras de Polanyi⁵⁵.

El arribo al poder de nuevos actores, es indispensable pero no es suficiente. Autores como Petras y Veltmeyer⁵⁶ ponen énfasis en la necesidad de una movilización semejante a la que precedió la llegada al poder de los gobiernos actuales. En efecto, las políticas públicas resultan usualmente de un proceso sesgado, en el cual el gobierno y las organizaciones representativas de grupos particulares, dentro de las restricciones económicas y políticas existentes, toman decisiones basadas en lo que perciben como sus intereses. Así que la presión de tal o cual grupo orienta dicho proceso. Al respecto, la movilización en Bolivia y en Venezuela es mayor a la de Argentina aunque sectores de la clase media y la elite rechazan a los gobiernos⁵⁷. Aquí puede encontrarse uno de los motivos del tibio reformismo argentino. Pero aún así, la articulación entre los sectores más des-

favorecidos de la sociedad y el Estado corre el riesgo de recaer en el clientelismo, lacra endémica de América Latina, y en la ineficiente burocracia⁵⁸. El apoyo popular a los gobiernos, tampoco puede prescindir de la satisfacción de las orientaciones de movilidad social, lo cual remite a su vez a la estabilidad del excedente económico.

Como conclusión, ¿No se podría decir, con las palabras de Žižek⁵⁹, que los gobiernos argentinos, boliviano y venezolano han buscado “la destrucción del elemento excesivo que causa el antagonismo”? Esto es, han enfrentado la contradicción ahora generada por los mercados globales autorregulados. Ahora bien, la prioridad recién otorgada a lo político en materia de integración regional (este fue lo que más preocupó a los autores de la independencia como Bolívar) podría representar otra faceta del re-arraigo⁶⁰.

BIBLIOGRAFÍA

- AGUDELO Valencia, DARIO Germán (2008), “Bolivia, 2003-2008: un periodo de profundas transformaciones políticas y económicas”, *Perfil de Coyuntura Económica*, Universidad de Antioquia, núm. 12, 179-202
- ALCÁNTARA Manuel, PARAMIO Ludolfo, FREIDENBERG Flavia, DÉNIZ José (2006), *Reformas económicas y consolidación democrática (Historia contemporánea de América Latina, volumen VI: 1980-2006)*, Editorial Síntesis, Madrid
- BELL Daniel (1977), *Las contradicciones culturales del capitalismo*, Alianza Editorial, Madrid
- CAILLÉ Alain (2009), *Théorie anti-utilitariste de l'action (fragments d'une sociologie générale)*, La Découverte (textes à l'appui)/bibliothèque du mauss, París
- DÁVILA ALDÁS Francisco R. (2002), *Globalización, integración (América Latina, Norteamérica y Europa)*, Distribuciones Fontamara, México
- FITOUSSI Jean-Paul, ELOI Laurent (2008), *La nouvelle écologie politique (économie et développement humain)*, Seuil (La république des idées), París
- GOBIERNO BOLIVARIANO DE VENEZUELA (2008), *2008; año de la revisión, rectificación y reimpulso de la revolución bolivariana*, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Caracas
- LÓPEZ VILLAFañE Víctor, DI MASI Jorge Rafael -coordinadores- (2002), *Del TLC al Mercosur (integración y diversidades en América Latina)*, Siglo XXI Editores, México
- PETRAS James, VELTMEYER Henry (2009), *Espejismos de la izquierda en América Latina*, Lumen México, México
- PEYRELEVADE Jean (2005), *Le capitalisme total*, Seuil (La république des idées), París
- POLANYI Karl (2001), *La gran transformación (los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo)*, Fondo de Cultura Económica, México
- ROCK David -compilador- (2009), *Argentina en el siglo veinte (economía y desarrollo político desde la élite conservadora a Perón-Perón)*, Lenguaje claro Editora, Buenos Aires
- RODRÍGUEZ Octavio (2006), *El estructuralismo latinoamericano*, Cepal/Siglo XXI Editores, México
- ROMÁN Viviana, DI SALVO Maria Teresa (2006), *Pobres hitos de la historia económica argentina (de Rocca a Menem)*, Omicron Editorial, Buenos Aires
- ROUQUIÉ Alain (1989), *América Latina: introducción al extremo occidente*, Siglo XXI Editores, México
- SANDOVAL PALACIOS Juan Manuel, ÁLVAREZ de FLORES Raquel -coordinadores- (2005), *Integración latinoamericana, fronteras y migración (los casos de México y Venezuela)*, Universidad de Los Andes (CEFI)/Centro de Estudios de Fronteras y Chicanos/Plaza y Valdés, México/Barcelona
- SVAMPA Maristella -editora- (2009), *Desde abajo (la transformación de las identidades sociales)*, Editorial Biblos (Sociedad), Buenos Aires

- TRINCHERO Héctor Hugo, BAZALOTE Alejandro (2007), *De la economía política a la antropología económica*, Eudeba (universidad de Buenos Aires), Buenos Aires
- WAISMAN H. Carlos (2006), *Inversión del desarrollo en la Argentina (políticas contrarrevolucionarias y sus consecuencias estructurales)*, Eudeba (universidad de Buenos Aires), Buenos Aires
- ZEA Leopoldo –coordinador– (2006), *América Latina en sus ideas*, Siglo XXI Editores/Unesco, México/París,
- ŽIŽEK Slavoj (2008), *Bienvenue dans le désert du réel*, Flammarion (Champs essais), París

NOTAS

1 Esos países pertenecen al modelo latinoamericano de subdesarrollo (véase Rodríguez, op. cit.). Sin embargo, la Argentina no era dualista ni estructuralmente heterogénea hasta la inversión en el desarrollo, que se dio a partir de los años 40. Se diferenciaba también del modelo latinoamericano del subdesarrollo por la alta razón tierra-trabajo y la escasez de mano de obra (Waisman, 2006: 33, 254 y 289).

2 Zea, 2006: 103-104

3 Sobre la dimensión cognitiva de las estrategias de elite, véase Waisman (2006: 215-253).

4 Polanyi, 2001: 27 y 121. En este artículo, nos enfocamos en la cuestión del desarraigo-rearraigo de la economía pero existen otros tipos de desarraigo, como el cultural (véase Bell, 1977).

5 Peyrelevade 2005: 10

6 Petras, Veltmeyer, 2009: 84. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una gran parte de esas tierras más fértiles de las tierras bajas del este no se les da un uso productivo. Las cien familias que son dueñas de una parte sustancial de las mejores tierras también son accionistas de los principales bancos, emisoras de televisión, plantas procesadoras de alimentos, etc. (ibid, 243 y 244).

7 García Linares, el vicepresidente, abogaba en 2005 por el establecimiento de un "régimen capitalista donde el potencial familiar, indígena y campesino esté equilibrado y articulado alrededor de un proyecto nacional de desarrollo y modernización productiva". O sea, un

Estado fuerte en hidrocarburos, con inversión extranjera y local, economía familiar, pequeñas empresas y una economía comunitaria". Dicho capitalismo, arraigado en la cultura indígena, es de tipo "comunalista" (se basa en el *ayllu*; esto es, la unidad social indígena anterior al incario) y se acerca más al socialismo utópico de Proudhon que del socialismo científico de Marx (ibid, 135).

8 Véase Polanyi, 2001: 156 y 157. Véase también en Trinchero, Balazote (2007: 149-170) el debate entre sustantivistas y formalistas.

9 Polanyi, 2001: 169 y 180

10 Caillé, 2009: 126. Sobre lo político, véase ibid, 125-144. Sobre la política, ibid, 126.

11 ibid, 98, 107 y 111-114. Al criticar el concepto polanyiano de arraigo de un orden de la práctica en otro, este sociólogo hace hincapié en la imposibilidad de deslindar concretamente los ordenes (ibid, 100-101 y 119-120). Los distintos ordenes no son homogéneos ni sincrónicos y cabe preguntarse lo que hay entre ellos, es decir en los intersticios entre ellos (ibid, 101-108). Existe una indeterminación relativa de los órdenes y de los contextos. Así, cada uno de los órdenes de la práctica (lo meta-económico, lo político, lo cultural, etc.) que sirve de contexto al orden económico debe referirse a su vez a otro contexto (ibid, 114-124). Empero en este trabajo, nos enfocamos en la relación entre el orden económico (el mercado) y la sociedad, no en la delimitación de los ordenes.

12 ibid, 126

13 López Villafañe, Di Masi, 2002: 95

14 2001: 28

15 1989: 60, 101 y 135

16 López Villafañe, Di Masi, 2002: 86-87. Al mismo tiempo, se desalentó a las exportaciones no tradicionales.

17 Sandoval Palacios, Álvarez de Flores, 2005: 219

18 López Villafañe, Di Masi, 2002: 288 y Comisión Económica para América Latina (CEPAL) cit. en Petras, Veltmeyer, 2009: 11 y 25; entre 2003 y 2006, el crecimiento del PIB fue del 3,9 en Bolivia y del 11,7 en Venezuela. Para las mismas fechas, los productos primarios como porcentajes de las exportaciones totales pasaron del 83,9 al 89,8 por ciento en Bolivia y del 87,3 al 94,4 por ciento en Venezuela.

19 Petras, Veltmeyer, 2009: 269. En Bolivia, la inversión pública representó un 5,1 por ciento del PIB del año 2005 y se elevaría a un 9,5 por ciento del PIB en 2011, según el Plan Nacional para el Desarrollo. En cambio, la inversión pri-

vada, de la que la mayor parte proviene de las inversiones extranjeras directas, representó un 7,1 por ciento del PIB en el año 2005 y se espera que se incremente a un 17 por ciento en 2011 (ibid, 270).

20 ibid, 11. Entre 2003 y 2006, la balanza de pagos sobre la cuenta de capital de Bolivia y sobre todo de la Argentina y Venezuela se volvió positiva (ibid, 14). En realidad, los crecientes precios del petróleo, los porotos de soja, el cobre y otros bienes básicos, más el surgimiento de China como importante comprador de bienes que se producen en América Latina, han dado como resultado una bonanza exportadora.

21 ibid, 213

22 ibid, 87-88, 266, 267-268. Para el año 2007, la inversión pública boliviana en el sector de hidrocarburos fue de apenas un 16 por ciento de lo proyectado (ibid, 270). En cambio, la inversión pública creció en todos los sectores entre 2006 y 2007 (Agudelo, Dario, 2008: 193).

23 Petras, Veltmeyer, 2009: 400. Según la CEPAL (cit. en ibid, 394), en América Latina el porcentaje del PIB dedicado a la formación de capital fijo bruto en 2006 (el 20 por ciento) fue muy por debajo del nivel logrado en 1980 (27,6 por ciento). Además, el nivel de inversión pública declina con relación a otras regiones como resultado de las privatizaciones de la década de los noventa (ibid, 391).

24 Polanyi, 2001: 126. El autor se refiere a la dislocación social.

25 ibid, 186. Sobre las causas del contra-movimiento protector; véase Alcántara y al, 2006: 151-171 para la Argentina, 223-239 para Bolivia y 289-307 para Venezuela.

26 Petras, Veltmeyer, 2009: 140 y 331

27 ibid, 267

28 CEPAL cit. en Petras, Veltmeyer, 2009: 139. Ningún país experimenta el desarrollo sin que haya importantes tasas de inversión pública en educación y salud. Además, existe una correlación entre el aumento de los gastos en salud y la democracia (Fitoussi, Laurent, 2008: 95 y 104).

29 Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2008: 108-109 y Petras, Veltmeyer, 2009: 330

30 Petras, Veltmeyer, 2009: 262-263

31 2001: 39 y 186

32 Agudelo, Dario, 2008: 188, Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2008: 85 y Petras, Veltmeyer, 2009: 71, 86, 273 y 332. En Venezuela, la recaudación en el periodo 2004-2007 de los impuestos citados equivale al 30,6 por cien-

to de las reservas internacionales alcanzadas en 2007 (elaboración propia con base al informe del Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2008: 68 y 85). Esta cantidad solía salir del país en forma de ganancias. Al llegar al poder, Chávez ya había establecido un impuesto a las transacciones financieras del 0,5 por ciento para aliviar el déficit fiscal.

33 Petras, Veltmeyer, 2009: 397-398. En Bolivia sin embargo, el gobierno tomó la decisión en 2007 de cubrir el déficit en el régimen de pensiones, con las ganancias petroleras.

34 Gobierno Boliviano de Venezuela, 2008: 88 y Petras, Veltmeyer, 2009: 69, 137-138, 233 y 332. En Bolivia, el Decreto de Nacionalización del Sector de los Hidrocarburos (de mayo de 2006) estipulaba que las empresas extranjeras de ese sector, tendrían que suscribir nuevos contratos con ganancias más altas para la empresa estatal: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el término de 180 días. En Venezuela, la renacionalización de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela significó utilidades para el Estado, a pesar de la cancelación de la deuda acumulada desde 1993 al 100 por ciento de los pensionados y al 90 por ciento de los jubilados (Gobierno Boliviano de Venezuela, 2008: 112).

35 cit. en Petras, Veltmeyer, 2009: 138

36 Petras, Veltmeyer, 2009: 141 a 145. En Argentina, el gasto público social como porcentaje del Producto Interno Bruto rondaba el 19,4 por ciento a mediados de la primera década del nuevo siglo. En Bolivia, era del 18,5 por ciento y en Venezuela del 11,7 por ciento (ibid, 140).

37 El que el gobierno debe recurrir a los mercados de capital con una frecuencia semanal para emitir bonos, cuyos aportes permiten atender los pagos de capital e intereses, genera una dependencia respecto a estos mercados y por lo tanto de sus exigencias de política económica.

38 Petras, Veltmeyer, 2009: 71 y López Villafañe, Di Masi, 2002: 91. Al terminar los dos mandatos de Menem (1989-1999), la deuda externa se había elevado un 123 por ciento (Román, Di Salvo, 2006: 192). Al final de la presidencia de Néstor Kirchner, la deuda de la Argentina también se había incrementado hasta superar los 160 mil millones de dólares (Petras, Veltmeyer, 2009: 71). Además, la dependencia con respecto a los agentes financieros externos contribuyó a modificar la estructura social a favor de los tenedores de activos líquidos (López Villafañe, Di Masi, 2002: 92-93).

39 Petras, Veltmeyer, 2009: 273. Sin embargo, Morales transfirió un 30 por ciento de los ingresos acumulados a favor de los gobiernos locales y de las universidades (ibid, 91).

40 Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2008: 67 y 69 y Petras, Veltmeyer, 2009: 332

41 Petras, Veltmeyer, 2009: 453. Por ejemplo, los préstamos que solicita la agroindustria argentina, explican la altísima rentabilidad de bancos multinacionales como *Santander*. Pero este banco no reinvierte sus ganancias; éstas se envían al extranjero o se invierten en bonos locales de alto retorno a corto plazo (ibid, 174).

42 Villafañe, Di Masi, 2002: 21

43 Petras, Veltmeyer, 2009: 159 y 161. En Argentina, la concentración del poder económico generó condiciones de crisis en el sector de los pequeños y medianos productores de cereales para exportación, al que el gobierno dirigió los dardos de sus retenciones en concepto de exportaciones (ibid, 162).

44 Ministerio de Finanzas de Bolivia para los datos relativos a las empresas, cit. en Petras, Veltmeyer (2009: 272). Más datos en ibid, 272 y 352.

45 Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2008: 72 y Petras, Veltmeyer, 2009: 159, 161, 223, 270, 330 y 335. Cabe señalar que la financiación masiva del gobierno de Chávez a cooperativas de pequeña escala administradas por pobres que cuentan con poca capacidad gerencial, se desperdició en gran parte. Dicha ayuda debería canalizarse en fábricas modernas de mediana o gran escala (Petras, Veltmeyer, 2009: 367)

46 cit en Petras, Veltmeyer (2009: 392)

47 Petras, Veltmeyer, 2009: 146-147, 243 y 396

48 ibid, 70, 72 y 89. En la Argentina, el precio del pan subió un 30 por ciento luego de los subsidios a los molinos vinculados con empresas del sector agroindustrial (ibid, 213).

49 Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2008: 64 y Petras, Veltmeyer, 2009: 333. Entre 1999 y 2007, la inflación promedio se ubicó en 19,6 por ciento mientras fue del 59,4 por ciento

de los años 1994 hasta 1998 (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2008: 62 y 63). Para Chávez la fragmentación de los mercados favorece el acaparamiento y la especulación, siendo estos causas de la inflación. Véase también Svampa (2009) sobre las consecuencias de la pobreza en Argentina.

50 Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2008: 62 y 65 y Petras, Veltmeyer, 2009: 27 y 334. La tierra se convierte en soja, azúcar y pasto para los mercados extranjeros, lo cual produce un mayor desequilibrio entre la demanda y la oferta local de alimentos y contribuye a aumentar las presiones inflacionistas.

51 Rouquié, 1989: 113-114. Véase "Poder y legitimidad", ibid, 109-128

52 Petras, Veltmeyer, 2009: 88 y 245 y Agudelo, Dario, 2008: 193

53 Petras, Veltmeyer, 2009: 331. Además, numerosos sectores de la clase media no ven al régimen de Chávez como un peldaño para superar su disminuido estatus social y refinciar su tradicional estilo de vida "a la Miami" (ibid, 349-350).

54 ibid, 162. Cuando Kirchner congeló las tasas que se cobraban a los consumidores de energía, los monopolios privados respondieron con la desinversión en el sector y se produjeron apagones y subprovisión de energía (ibid, 72).

55 2001: 189

56 Petras, Veltmeyer, 2009: 148

57 En Argentina, la restauración del peronismo, y su continuador, el Partido Justicialista, ha sido un medio para combatir el peligro de izquierda y prevenir la revolución (Rock, 2009: 32 y 257).

58 Para el caso de Venezuela, véase Petras, Veltmeyer, 2009: 366-367.

59 2008: 59

60 Hasta hace poco, se privilegiaron netamente los aspectos de tipo económico de la integración regional y se dejaron casi implícitos los elementos políticos de la misma (Dávila Aldás, 2002: 111-112).